

La crisis económica y sus impactos sobre la política de empleo e ingresos en Argentina/ *The economic crisis and its impacts on employment and incomes policies in Argentina*

PABLO ERNESTO PÉREZ*

MARIANO FÉLIZ**

Resumen: La crisis global comenzó en 2008 a golpear la economía argentina y puso en cuestión nuevamente las políticas sociales y de empleo. La respuesta del gobierno fue profundizar un esquema que asume que el crecimiento podrá resolver –por sí solo– el problema del bienestar. En este trabajo nos proponemos alcanzar dos objetivos principales. Primero discutir la actual crisis y las formas en que se articula el ciclo del capital en Argentina. Segundo analizar las políticas de empleo y sostenimiento de ingresos implementadas con posterioridad al 2001, en especial aquellas que se creadas en el marco de la crisis. Con este fin se trabajará a partir de información estadística e informes y evaluaciones de los principales programas implementados: el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, el Programa de Recuperación Productiva (REPRO) y el Plan de Ingreso Social con Trabajo “Argentina Trabaja”.

Palabras-clave: Crisis económica, Capitalismo periférico, Políticas sociales, Políticas laborales, Ingreso básico.

* Dr. en Ciencias Económicas (Paris Est, Francia) y Dr. en Ciencias Sociales (UBA, Argentina). Investigador CONICET en el CEIL-PIETTE. Docente en las Universidades de La Plata y Buenos Aires. Dirección: calle 8 n 2013, La Plata, Argentina (1900). Correo electrónico: pperez@ceil-piette.gov.ar; paperez@isis.unlp.edu.ar

** Dr. en Ciencias Sociales (UBA, Argentina) y Dr. en Ciencias Económicas (Paris 13/Nord, Francia). Investigador CONICET en el Centro de Investigaciones Geográficas / Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales. Docente de la Universidad Nacional de La Plata. Miembro del Centro de Estudios para el Cambio Social. Dirección: avenida 7 no. 1386 dto. B, La Plata (1900), Argentina. Correo electrónico: marianfeliz@gmail.com // marianfeliz.wordpress.com.

Abstract: Global crisis began in 2008 to hit Argentina's economy and questioned, once again, social and employment policies. The answer of the government to the crisis was to deepen the policy framework that assumes that growth will solve – on its own – the problem of wellbeing. In this article we propose to reach two main objectives. First, to discuss the current crisis and the form in which it articulates with Argentina's cycle of capital. Second, to analyze employment and income support policies in place since 2001, in particular those created in the context of the crisis. Given this, we'll work with statistical information and reports and evaluations of the main programs implemented: the plan for unemployed heads of households (Plan Jefes y Jefas), the program for productive recuperation (REPRO) and the plan of social income with employment ("Argentina Trabaja").

Key words: Economic crisis, Peripheral capitalism, Social policies, Labor policies, Basic income.

Introducción

La crisis global –originada en las contradicciones de un proceso de valorización exitoso a escala planetaria- comienza a manifestarse en la economía argentina a partir del año 2008 y sus consecuencias sociales se extienden enérgicamente durante 2009. Despidos, suspensiones de trabajadores, aumento –luego de 5 años de descenso continuo- en la tasa de desempleo y en los niveles de pobreza. Frente a un proceso de acumulación que mostraba sus límites sociales y económicos, la recesión internacional puso en cuestión nuevamente las políticas públicas y en particular las políticas sociales y de empleo.

La respuesta del gobierno ante este nuevo escenario es exigua y en línea con la propuesta de los organismos internacionales. En agosto de 2009 anuncia el *Plan de ingreso social con trabajo*, mediante el cual se propone crear unos cien mil puestos de trabajo para desocupados en situación de pobreza. ¿Se trata de un plan de transferencia de ingresos para atender situaciones de pobreza o de un programa de empleo? Si se trata

de un programa de transferencia de ingresos¹ ¿Por qué agregar la leyenda “con trabajo”? ¿Supone que los beneficiarios no van a hacerlo por el hecho de cobrar el subsidio? A su vez, prioriza la defensa de los empleos en el sector privado formal mediante el denominado programa REPRO ¿Qué lleva a priorizar mantener el empleo registrado subsidiando a empresas que tuvieron una elevada ganancia durante la reactivación? En definitiva ¿Cuál es el diagnóstico que está detrás de las políticas de empleo e ingresos implementadas luego de la crisis de 2001? Nuevamente, en lugar de aprovechar la coyuntura para avanzar en una reformulación de la lógica de las políticas públicas sociales y de empleo, el gobierno profundiza un esquema que asume que el modelo económico podrá resolver –por sí solo- el problema del bienestar.

Dos objetivos guían el desarrollo del texto. En primer lugar, discutir la actual crisis del capital a escala global y las formas en que se articula el ciclo del capital en Argentina con la crisis mundial. En segundo lugar, analizar las políticas de empleo y sostenimiento de ingresos implementadas con posterioridad a la devaluación del peso (2002-2009), en especial aquellas que se manifiestan luego de la crisis, y a partir de allí dar cuenta de los interrogantes planteados previamente.

El artículo consta de cinco partes. La primera presenta un análisis de la actual crisis del capital a escala global. La segunda parte desarrolla las formas en que se articula el ciclo del capital en Argentina con la crisis mundial. La tercera sección analiza las perspectivas del gobierno argentino y del capital frente al desarrollo de la crisis. La cuarta sección discute las políticas de ingresos implementadas en la Argentina para hacer frente a las manifestaciones económico-sociales de la crisis. Por último, la quinta parte expone las reflexiones finales.

¹ Este parece ser el caso, dado que mientras no queda muy claro cuales serán las actividades a realizar, si está definido que los beneficiarios cobrarán un sueldo mínimo y tendrán acceso a una obra social.

Crisis global o crisis del capital

El modo de producción capitalista –dominado por la relación social capital- se basa en la valorización del valor a través de la explotación incesante del trabajo humano y la naturaleza. Hoy el ciclo del capital es un proceso mundial que abarca miles de ciclos de valorización que se superponen, entrelazan y articulan en y a través de los Estados nacionales. A diferencia de la visión ortodoxa (la neoclásica, pero también la keynesiana) –que entiende a la crisis como producto de un factor inesperado o una falla en la regulación del sistema- entendemos que la crisis actual parte del éxito que mostró la valorización del capital en el marco del proceso de reestructuración –conocido como neoliberalismo- que inició a mediados de los años setenta. La reestructuración económica condujo –entre otras cosas- a una creciente flexibilidad del capital fijo (no sólo del trabajo como forma de capital). En efecto, como señalan Marini (1997) y Ceceña (1996), el fortalecimiento de la tendencia del capital a internacionalizarse condujo a partir de los años setenta un doble movimiento. Por un lado, la mayor movilidad del capital fijo –crecientemente capaz de mudarse a bajo costo de un lado del globo a otro- junto a la flexibilidad productiva permitida por el desarrollo de la tecnología informática han convergido en una aceleración de la circulación del capital y –en definitiva- han creado una masa disponible de capital bajo su forma dineraria que alimentó el circuito especulativo. Por otra parte, la internacionalización definitiva del ciclo del capital condujo a la internacionalización del capital variable, es decir, de la fuerza de trabajo. Por primera vez en la historia del capitalismo la fuerza de trabajo (y el ejército de reserva) tiene efectivamente una dimensión global. La abstracción real del trabajo –el imperio de la ley del valor- a escala mundial alcanzó realidad sustancial a finales de los años ochenta.

El neoliberalismo se dio así la tarea de profundizar las tendencias a la mundialización del capital y la contención de los

conflictos obreros. En pocos años, la flexibilidad laboral, la crisis de la deuda, las privatizaciones masivas y la desregulación financiera crearon el clima que permitió al capital social retomar —a escala mundial- la acumulación sostenida.

Casi 25 años de expansión casi sin interrupciones de las economías centrales —y en particular de la economía aún hegemónica, la economía norteamericana- conformaron un volumen de contradicciones que no pudo ser contenido indefinidamente.

La primera gran contradicción está ligada directamente a la forma del proceso de expansión de la producción de mercancías. En efecto, la etapa neoliberal se presentó como una avanzada de los sectores dominantes para reestructurar las relaciones de producción, destruyendo (o limitando seriamente) la capacidad de resistencia de los/as trabajadores/as para alterar las modalidades de producción y forzar una determinada ratio de apropiación del valor producido. Lo que se aprecia en las tres décadas que han pasado es un aumento en la capacidad del capital de producir riqueza material (bajo la forma mercantil) junto a una creciente incapacidad de los sectores trabajadores de apropiarse de esa riqueza para su consumo. En los Estados Unidos —a modo de ejemplo- mientras que la productividad laboral aumentó sostenidamente (155,9% entre 1985 y 2007) los salarios reales prácticamente se estancaron (subiendo sólo 29,9%). Tendencialmente este proceso conduce a una situación de pérdida relativa de capacidad de realización de la creciente producción y —por lo tanto- del valor y plusvalor que representa. En ese marco, desde finales de los años ochenta los Estados Unidos se convirtieron en el centro de un nuevo proceso de valorización exitosa de capital. Exitosa no en términos de sus logros sociales sino en cuanto a su capacidad de contener, reprimir y canalizar —neutralizando- las exigencias populares, garantizando a su vez la máxima explotación posible del trabajo a escala planetaria.

En segundo lugar, el fuerte aumento en la productividad laboral se traduce simultáneamente en una reducción sostenida en el valor del conjunto de las mercancías producidas. Este aumento no se convierte inmediatamente en una caída de precios pero la desvalorización del conjunto del capital bajo sus diferentes formas (mercantil, productivo, fuerza de trabajo, financiero) sólo puede desplazarse en el tiempo y el espacio pero no eliminarse indefinidamente. La desvalorización significa un violento y generalizado cambio en las relaciones de valor (entre capital constante y variable, circulante y fijo, variable y plusvalor). De allí que su resolución no sea una cuestión natural o un mero “ajuste” sino una generalizada lucha entre clases y al interior de la clase burguesa.

El modo de producción capitalista choca contra una pared hoy en día por su propia lógica: producir cada vez más a un valor (costo privado) cada vez menor para el consumo de una proporción decreciente de la población. El costo unitario de producción cayó un 41,4% -en términos reales- entre 1985 y 2007 en los Estados Unidos. Se produce más que nunca pero miles de millones en el mundo siguen pasando hambre: aún hoy más de 850 millones de personas no acceden a los medios de consumo necesarios para evitar la indigencia.

Esas contradicciones suponen, como señalamos, la destrucción del capital. Sin embargo, pueden ser desplazadas en el tiempo y el espacio como forma de evitar por cierto tiempo asumirlas. En las dos décadas de desarrollo y avance del proyecto neoliberal el desplazamiento fue facilitado por (a) la internacionalización del capital y la consecuente expansión del comercio mundial, (b) la penetración capitalista en los espacios territoriales del socialismo real, (c) el avance privatizador en los distintos países y bajo las formas más variadas, y (d) la expansión de las formas financieras del capital. Estas últimas han estado en la mira como las causas de la crisis. El desplazamiento de

las contradicciones creadas en el ámbito productivo lo que –en la crisis actual- crea las condiciones para las formas financieras de manifestación. En realidad, la valorización financiera operó activamente como medio para dar continuidad a la expansión del valor cuando su capitalización en el ámbito de la producción se hacía cada vez más difícil. De manera secuencial actuaron –para luego derrumbarse- la especulación en las empresas punto com a finales de los años noventa, la especulación inmobiliaria y finalmente el *boom* de la especulación en *commodities*.

La crisis es el proceso a través del cual el proceso de reestructuración general se manifiesta abiertamente. En ella –y a través de ella- los sectores dominantes intentarán imponer a los trabajadores el costo de esa reestructuración necesaria –objetiva en el marco de las relaciones de producción capitalistas-. Avanzarán en ese sentido primero de forma descentralizada: reduciendo empleos, intentando bajar salarios, incorporando cambios organizacionales que aumenten la productividad, a través de fusiones, adquisiciones y procesos de centralización, etc. De esa manera, al decir de Marx, los capitalistas en competencia llevan adelante las “leyes” del capital sin ser plenamente conscientes de ello. Pero en la crisis los capitalistas reconocen más claramente sus intereses como clase y actuando en consecuencia exigen de manera colectiva la acción pública a su favor. En esos momentos, los empresarios –de todas las ramas y sectores, sin distinción- hacen frente común contra el trabajo demandando fondos y acciones públicas para financiar el ajuste que –como porciones del ciclo del capital social- no pueden evitar.

La presente crisis potencia los costos sociales de la dominación del capital (incluidos la destrucción del medio ambiente y el saqueo de las riquezas naturales). El mismo avanza con fuerza en lo que puede denominarse la etapa del imperialismo con acumulación por desposesión (HARVEY, 2004, 2005). Estamos frente a una crisis ambiental y civilizatoria, además de

económica (CHESNAIS, 2008); una crisis que pone en cuestión el conjunto del capitalismo como única forma de desarrollo, además del propio concepto de “desarrollo” y los parámetros para medirlo. Entran en debate las relaciones capitalistas de producción y reproducción social, es decir el papel del dinero y el capital como mediación de las relaciones entre personas (LEBOWITZ, 2005). El capital propone como idea del desarrollo meramente el crecimiento, es decir la expansión sin fin del valor, de su propia esencia (DE ANGELIS, 2007). La crisis –por su parte– pone en debate los valores capitalistas (la ganancia por la ganancia, la producción por la producción, la mercancía como la forma privilegiada –tendencialmente única– que deben asumir las relaciones humanas). El concepto capitalista del desarrollo implica la imposición de valores que conducen a la oposición, al enfrentamiento y la competencia, como forma de articular las relaciones interpersonales. La crisis civilizatoria pone en primer plano la crítica práctica de esas formas de hacer capitalistas. Los valores predominantes de la sociedad contemporánea –los valores del capital– no hacen sino destruir (ahora de manera transparente) las posibilidades de reproducción social. La dignidad humana brota como nuevas formas de actuar y hacer. Como un sinnúmero de “otros valores” (DE ANGELIS, 2007) enfrentando al capital e intentando de hecho su superación como forma de mediación social, a través de su potencial articulación común.

El ciclo del capital en Argentina y su articulación con la crisis general

Esta crisis golpeará a todos los países del mundo pero en la periferia el impacto será mayor en aquellos donde la transnacionalización haya avanzado más (FÉLIZ, 2009). La recesión iniciada en los países centrales está impactando más en aquellos países cuyas economías están más fuertemente incorporadas

—de manera subordinada— a la economía mundial. Esto es particularmente evidente para aquellas economías periféricas menos diversificadas y con sistemas productivos menos integrados. Esto incluye tanto a aquellas cuya integración en el ciclo del capital global se produce fundamentalmente bajo la forma de enclave o de exportación de unas pocas mercancías indiferenciadas (por ejemplo, Venezuela y Ecuador) como los países cuyas producciones de exportación se encuentra fuertemente articuladas a los mercados centrales en contracción (por ejemplo, México, Brasil y Chile). Estos países verán sus economías crecer mucho menos (Chile) o —en varios casos— decrecer en menor (México, Venezuela, Ecuador) o mayor medida (Brasil). Según las estimaciones del FMI, en 2009 la evolución del PBI real será: 0,11% en Chile, -1,3% en Brasil, -2% en Ecuador, -2,2% en Venezuela y -3,7% en México (FMI, 2009).

Por una vez la crisis internacional golpea a la economía argentina en una posición de relativa fortaleza. Si bien la misma se encuentra fuertemente integrada al ciclo del capital global parece estar relativamente guarnecida frente al impacto directo de la crisis. Mientras que en los Estados Unidos, por ejemplo, la producción industrial ha caído un 13,6% en Junio de 2009 en comparación igual período del año anterior según el Bureau of Economic Analysis (BEA) de los Estados Unidos o un 10,8% en Brasil en Julio de 2009 en comparación igual período del año anterior según el Instituto Brasileiro de Geografía e Estadística (IBGE), en Argentina el impacto ha sido más reducido: la producción industrial cayó sólo 1,6% en Julio de 2009 en comparación igual período del año anterior, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) de Argentina. La dominación del capital se ha consolidado con la salida de la convertibilidad en Argentina (FÉLIZ, 2007).² La reestructuración de los noventa conformó una

² La convertibilidad fue un programa de reformas económicas que se inició en Argentina en 1991. Inspirado en las propuestas del Consenso de Washington, el programa incluyó la privatización de la mayoría de las empresas públicas, la desregulación y apertura de la economía y —novedosamente— el establecimiento de la Convertibilidad del peso argentino al dólar norteamericano.

centralización, concentración y trasnacionalización del capital que -junto al reforzamiento de la descomposición política de las/os trabajadoras/es- auspician una desaceleración significativa pero no una debacle económica de magnitud.

Frente a una crisis que a escala global todavía no parece cerrada en el espacio de valor que incluye a la Argentina como territorio el ciclo del capital parecía a mediados de 2008 bastante sólido. La tasa de ganancia del gran capital alcanzó su pico en 2006/2007 (16,6% sobre el capital circulante, en comparación con 10,3% en 2003) y el ritmo de la acumulación no parecía haber alcanzado su límite (en el primer trimestre de 2008 la inversión bruta interna fija (IBIF) crecía a un ritmo anual de 35%, en términos reales). Sin embargo, en julio de 2008 la producción industrial comienza a dar signos de estancamiento. En los hechos, desde ese momento y hasta junio de 2009 la industria dejó de crecer. No cae estrepitosamente -en promedio- pero pasó de un crecimiento anualizado de 9,2% en julio de 2008 a una caída anual en julio de 2009; por supuesto, hay varias ramas industriales (como las automotrices) que están sufriendo fuertes contracciones en sus niveles de producción.

Claramente, dos elementos han impactado fuertemente en las ganancias empresariales en Argentina: la reducción en las exportaciones netas y el freno en la inversión. Primero, la reducción en las exportaciones netas -que han caído de un máximo en 2003 cercano a 5% del PBI a sólo 1,3% en el primer trimestre de 2009- tuvo un impacto fuerte en la rentabilidad global del capital. El derrumbe de las exportaciones desde entonces ha sido muy fuerte (30,2% en julio de 2009, en comparación a julio de 2008). Por otro lado, la caída en la inversión bruta interna fija (IBIF) ha sido muy importante: 17,8% en el primer trimestre de 2009 en comparación con el trimestre anterior. En la comparación interanual, la IBIF cayó 3% en los primeros tres meses de 2009.

Los costos sociales de la crisis en ciernes se hacen cada vez más evidentes en tanto avanzaba el año 2009: suspensiones a más de 100 mil trabajadores/as en los primeros meses, miles de despidos (199 mil desde fines de 2008, según el INDEC) y la consecuente caída en la tasa de empleo junto al aumento del subempleo: la tasa de empleo cayó de 42,2% -de la población total- en el 2do trimestre de 2008 a 41,8% un año después mientras que la subocupación horaria saltó de 8,6% -de la población económicamente activa- a 10,6% en igual período. Junto a la persistencia de carencias estructurales no resueltas para amplios sectores de la población (precarización del empleo cercano al 60% de los ocupados, incidencia de la pobreza por ingresos superior al 30% de la población, elevados déficits de vivienda e infraestructura urbana, continuado deterioro de la educación y la salud pública) este proceso compuso un mapa social en rápido deterioro.

El gobierno y el plan del capital frente a la crisis

Frente a la realidad de la crisis que comenzaba a ceñirse sobre la economía argentina, el gobierno nacional decidió –de urgencia- adelantar las elecciones legislativas.³ Débil en su origen mismo (en 2007 se habían agotado los efectos sociales positivos de las expansiones económicas y habiendo ganado la elección presidencial perdiendo en las principales ciudades del país)⁴, el gobierno nacional buscó aprovechar el poco capital político remanente luego del profundo desgaste de 2008 en el conflicto por las retenciones

³ Las mismas debían realizarse en Octubre de 2008 pero fueron anticipadas para Junio de ese mismo año. En ellas serían reemplazados la mitad de los diputados nacionales y un tercio de los senadores nacionales.

⁴ Luego de una mejora sustancial en los indicadores sociales entre 2002 y 2006, a partir de 2007 comienza a vislumbrarse un cierto estancamiento en la elasticidad empleo-producto, en los salarios reales (que no logran superar en promedio los niveles de 2001) y en la incidencia de la pobreza (que permanece por encima del 25% de la población). En ese contexto, la senadora nacional Cristina Fernández fue electa como Presidenta de la Nación en octubre de 2007 obteniendo la mayoría de los votos en el conjunto del país pero perdiendo frente de distintos candidatos opositores en las ciudades más pobladas del país.

agropecuarias.⁵ La estrategia no le sirvió para evitar ser derrotado en el principal distrito electoral del país (provincia de Buenos Aires) y perder numerosas bancas en el Congreso Nacional.

La composición de crisis económica y política conduce a los sectores dominantes a ganar conciencia de sus intereses generales y la necesidad de asegurarlo. Claramente no está en riesgo la dominación capitalista en Argentina; estamos muy lejos, al menos por ahora, de una situación como que prevalecía a finales de 2001 y comienzos del año siguiente.⁶ Consolidada su hegemonía, sin embargo, una crisis que podría profundizarse en lo inmediato (por factores internos y externos) pone a los grandes grupos y empresas transnacionalizados en la necesidad de expresar –y presionar por– sus intereses. Es claro en tal sentido el reciente documento (19/7/2009) de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) conformada por los mayores capitales locales.⁷

En ese texto los sectores dominantes dan cuenta de algo que pocas veces hacen: reconocer su visión de clase y la posición de clase de su discurso asumiendo la unilateralidad de sus posiciones aunque intenten presentar su posición sectorial como “un aporte al diálogo entre todos los argentinos”. De una atenta lectura queda claro que la posición del gran capital es siempre pragmática (en particular en la crisis) al declarar la necesidad de la intervención del Estado a favor de las empresas pero marcar

⁵ A comienzos de 2008 el poder ejecutivo decidió incrementar el impuesto (ya existente) a las exportaciones de cereales y oleaginosas. Imprevistamente para el gobierno, esta medida desató una serie de protestas de los productores agropecuarios a lo ancho del país, con manifestaciones masivas y cortes de rutas. El conflicto concluyó – dos meses después – con la derrota de la propuesta oficial.

⁶ A finales de 2001 el programa de convertibilidad entró en su crisis definitiva. Luego de 4 años de recesión económica, violenta caída en los depósitos bancarios, déficit fiscal incontrolable y crecientes conflictos sociales, el gobierno nacional del De la Rúa cayó. En los últimos días del año 2001 y los primeros de 2002 se sucedieron 5 presidentes, la convertibilidad fue abandonada y la moneda nacional devaluada.

⁷ Esta asociación incluye las empresas más grandes de la economía argentina de las distintas ramas industriales como Organización Techint y Arcor, pasando por empresas de medios como Grupo Clarín o S.A. La Nación y empresas financieras como Santander Río o Citi; no quedan afuera tampoco Los Grobo Agropecuaria, laboratorios Roemmers o petroleras como YPF.

una distinción clara entre el ámbito de lo estatal y el espacio de la empresa. Este documento es –ni más ni menos– que un decálogo de la economía política del capital, cuya base teórica es la moderna economía ortodoxa (en sus versiones neoclásico-liberal y keynesiano-desarrollista). La misma se basa en la defensa de la economías capitalista “moderna” cuya base es la competencia intercapitalista, la defensa de la propiedad privada y la ganancia empresarial, y el desarrollo de “reglas de juego” que garanticen el desarrollo de la iniciativa (inversión) privada sin la intromisión estatal. Esto no invalida la intervención pública para promover la transnacionalización de los grandes capitales locales, favorecer la formación de una fuerza de trabajo de calidad adecuada a los fines de participar en la “economía global del conocimiento” (en particular con “responsabilidad personal”) y –sobre todo– crear un “marco de seguridad pública”.

Las medidas del gobierno han iniciado una etapa de transición a través de la cual espera poder llegar a 2011 en condiciones de revalidarse –algo que hoy parece improbable–. En cualquier caso, el objetivo de la alianza gubernamental es “pilotear” la crisis ganando la confianza de los sectores empresariales que ya están mostrando inquietud. La fuga de capitales –que superó los 16 mil millones en el año terminado en el primer trimestre de 2009⁸– y el salto en el riesgo país (que aumentó un 63% en 2009 comparado con todo 2008) no son más que el signo más notorio de la impaciencia del capital. En tal sentido, el gobierno avanza en negociar los términos de un regreso a la tutela del Fondo Monetario Internacional y continúa con una política de contención salarial, superávit fiscal y subsidios al gran capital. A su vez, en su intento de contener el agravamiento de la cuestión social tiende a repetir medidas que siguen las sugerencias de los organismos internacionales en la

⁸ Tener en cuenta que las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) eran de 46900 millones de dólares en ese momento. Dada la existencia de un masivo superávit en la cuenta corriente del balance de pagos, la fuga de capitales no implicó una caída en las reservas del BCRA.

dirección de activar e individualizar las políticas públicas de empleo, a través de la imposición de actividades a los desocupados, la focalización de los instrumentos hacia los grupos más vulnerables, la instrumentación de políticas de oferta (formación, ayuda para la búsqueda de empleos), así como incentivos a las empresas a través de reducciones de sus costos laborales (para que contraten o no despidan trabajadores). A continuación analizaremos algunas de las más importantes medidas en este sentido impulsadas por el gobierno.

¿De las políticas sociales a las políticas laborales? El discurso y las prácticas del gobierno frente a la crisis.

El gobierno enfatiza la vinculación del crecimiento del producto con la creación de “empleo decente”, resaltando la articulación de las políticas macroeconómicas con las laborales y sociales (TOMADA, 2007). Ubica al empleo en el centro del discurso sobre las políticas públicas, señalando al trabajo como el principal instrumento de inclusión social. ¿Pero se corresponde la práctica con esos planteos? Analicemos la cuestión a partir de algunas de las medidas implementadas en los últimos años.

La empleabilidad y la desarticulación del principal programa social

Una vez que mejora la grave situación social que tuvo lugar a la salida de la crisis de 2001/2002 y se retoma un sendero de crecimiento económico, el gobierno decide que es necesario “ordenar” a los beneficiarios del masivo Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (PJJHD) –que habían alcanzado los dos millones de beneficiarios en 2003 (alrededor del 80% de los trabajadores desocupados)- para posibilitar el diseño de políticas específicas. Con este fin, en 2004 establece que los Ministerios de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) y de Desarrollo Social

(MDS) elaboren una clasificación de los beneficiarios del PJJHD de acuerdo a sus condiciones de empleabilidad (MTESS, 2004). En base a ella los beneficiarios son derivados hacia dos nuevos programas: el Plan Familias por la Inclusión Social (Plan Familias), y el Seguro de Capacitación y Empleo (SCE). Al primero de estos programas se orienta a aquellos beneficiarios evaluados con muy pocas probabilidades de encontrar un empleo (principalmente beneficiarias mujeres con más de 2 hijos) quienes pasan a depender de la asistencia social. Aquellos beneficiarios considerados más empleables –por el contrario- son incentivados a pasar al Seguro de Capacitación y Empleo donde (según el gobierno) podrían mejorar su empleabilidad, formándose y capacitándose mientras las oficinas públicas de empleo identifican su situación y los orienta hacia diferentes posibilidades de inserción laboral.

¿Quién define quienes son empleables y quienes no lo son? ¿Cuál es el criterio que divide las aguas? La noción misma de empleabilidad genera controversias.⁹ La concepción más difundida combina actitudes, habilidades y calificaciones de los trabajadores, consideradas indispensables para enfrentar los rápidos cambios en una economía globalizada. También apunta a la responsabilidad individual y a la capacidad de construir y movilizar redes sociales. Cada trabajador aparece en esta visión como gestor de su propia trayectoria laboral.

Esta visión de la empleabilidad centrada en características del individuo mantiene toda su vigencia en la perspectiva de organismos internacionales (Banco Mundial, OIT, CEPAL). Este enfoque de la empleabilidad es también compartido por aquellos autores que buscan conciliar la flexibilidad del mercado y la seguridad de los trabajadores (la llamada “flexiguridad”) y por los partidarios de la “tercera vía” (GIDDENS, 1998) quienes proponen mantener la empleabilidad mediante la formación a lo largo de toda la vida. Formación y activación persiguen un

⁹ Para una discusión de diferentes perspectivas en distintos periodos ver Gazier (1990, 1999) y Barbier (2000).

mismo objetivo: aumentar la autonomía y las oportunidades de los individuos (lo que en la literatura anglosajona se llama *empowerment*) para darles los medios para llevar adelante sus proyectos en lugar de simplemente asistirlos. El rol del Estado es ahora proveer a los individuos de una parte de estos activos o ayudarlos a adquirirlos, de manera que ellos puedan disponer de un patrimonio que los constituya como “empresarios” de su propia vida (GAUTIE, 2003).

La bifurcación del PJJHD luego de superada la crisis de 2001/2002 marca un giro en la política social, que sigue —tal como lo hizo en periodos anteriores— las sugerencias de los organismos internacionales. El SCE es un claro ejemplo de la activación de políticas pasivas y de la imposición de actividades a los desocupados pasando a ocupar el lugar del seguro de desempleo. Para cobrar la prestación (no remunerativa) el trabajador desocupado suscribe un convenio de adhesión en el cual se compromete a participar en actividades de orientación y asistencia en la búsqueda de empleo, de formación básica y profesional, de práctica laboral, de formulación de proyectos de autoempleo y, finalmente, a aceptar las ofertas de empleo que se le propongan (adecuadas a su experiencia y formación).

En esencia, el gobierno busca que la posesión de un empleo garantice un ingreso mayor que una prestación social, preservando el atractivo de las remuneraciones recibidas en el mercado de trabajo. Para ello, en un contexto de menores salarios reales después de la devaluación de comienzos de 2002 (especialmente para los trabajadores en puestos informales) era necesario reducir los montos reales de las prestaciones sociales.

Las políticas frente a una coyuntura económica de crisis.

Ante los crecientes costos sociales producto de la crisis global y de cierto agotamiento del modelo económico adoptado

(FÉLIZ, 2008) el gobierno renueva sus intervenciones pero sin variar el rumbo escogido. Junto con las manifestaciones de la crisis va tomando cada vez mayor relevancia el Programa de Recuperación Productiva (REPRO) que subvenciona la masa salarial de las empresas que manifiestan estar en situación de crisis con el objetivo de que no despidan trabajadores. A través de este programa el gobierno da prioridad al mantenimiento de empleos registrados subsidiando a empresas que tuvieron elevadas ganancias durante la etapa expansiva 2003-2008. Por otra parte, y en paralelo, para aquellos hogares en situación más vulnerable se anuncia en agosto de 2009 el Plan de Ingreso Social con Trabajo “Argentina Trabaja” (PIST) mediante el cual se propone crear cien mil puestos de trabajo en cooperativas para trabajadores desocupados en situación de pobreza. Nuevamente aparece en este plan la ambigüedad manifestada en el PJJHD: ¿se trata de un plan de transferencia de ingresos para atender situaciones de pobreza o de un programa de empleo? Si como parece el PIST es un programa de transferencia de ingresos¹⁰ por qué agregar la leyenda “con trabajo”. ¿Supone el gobierno que los beneficiarios no trabajarían si reciben el subsidio sin ninguna otra obligación? A continuación examinaremos con más detalle ambos programas.

El Programa de recuperación productiva (REPRO)

Si bien el REPRO es un programa creado en 2002, su utilización por parte de las empresas no adquiere importancia hasta 2008 en la medida en que la crisis comienza a manifestarse en nuestro país. Su objetivo declarado es contribuir a sostener y promover el empleo “genuino” apoyando la recuperación de sectores privados y/o de áreas geográficas en crisis. Para acceder a este beneficio las empresas deben acreditar la situación de crisis

¹⁰ Mientras no queda muy claro cuáles serán las actividades a realizar, está definido que los beneficiarios cobrarán un sueldo mínimo (1316 pesos de promedio en 2009) y tendrán acceso a una obra social como monotributista (social).

por la cual atraviesan, detallar las acciones a desarrollar con miras a su recuperación y comprometerse a no realizar despidos de personal. Los trabajadores de las empresas adheridas recibirán una suma fija mensual no remunerativa de hasta 600 pesos (equivalente a 157 dólares estadounidenses en 2009) destinada a completar la remuneración correspondiente a su categoría laboral.¹¹ En junio de 2009, 1.492 establecimientos se habían acogido el programa y existían 84.628 beneficiarios que involucran un fondo comprometido de 200 millones de pesos (MTESS, 2009).

No obstante la buena intención de preservar puestos de trabajo en el sector formal, la medida tiene sus contradicciones. El apoyo a una determinada empresa (que pueda acreditar su situación de crisis) puede ser perjudicial para otra empresa competidora. La empresa puede aprovechar los empleos subvencionados para mantener (y mejorar) su ganancia en un periodo de crisis. Alternativamente, podría disminuir sus precios (o subirlos más lentamente que sus competidoras) y ganar espacios de mercado, lo que podría llevar a que las empresas competidoras disminuyan su planta de personal. De esta manera, si bien se mantiene empleos en la empresa beneficiada, pueden destruirse puestos de trabajo en otros sectores del mercado.

Las empresas que más utilizaron el beneficio del REPRO fueron medianas y grandes firmas y no las pequeñas, dado que las pequeñas empresas ocupan gran parte de sus trabajadores sin contrato (no registrados). Esto puede contribuir a ampliar las desigualdades en las posibilidades de obtención de ganancias entre empresas de diferente tamaño.

En Argentina, en dos de los sectores que más utilizaron el REPRO (metalúrgicos y automotrices/autopartes), los sindicatos acordaron -en agosto y septiembre de 2009- subas salariales del

¹¹ Como punto de comparación el salario mínimo de un trabajador formal en promedio igual a 1316 pesos o 344 dólares norteamericanos. Es decir, que el máximo subsidio del REPRO equivalía a 45,5% del salario mínimo promedio de 2009.

orden del 21,5% para el caso de la UOM (Metalúrgicos) y del 27,8% para SMATA (automotrices/autopartes) para los próximos 12 meses. Esto manifiesta la contradicción de cómo empresas en situación de crisis (condición necesaria para acceder al subsidio) pueden disponer aumentos salariales considerablemente por encima del nivel de inflación oficial (que fue de 7,7% en 2009). De manera tal que empresas supuestamente en crisis son subsidiadas por el Estado pero pueden otorgar aumento salariales por bien por encima de la media. El REPRO aparece como un elemento relevante en la negociación salarial –al menos en estas ramas– llegando a incluirse en el acuerdo firmado por la UOM “la necesidad de que el REPRO se extienda para quienes lo soliciten de aquí en adelante”.¹² El subsidio estatal no sólo sostiene las ganancias empresariales sino que les permite garantizar la estabilidad de las relaciones laborales que de otro modo se verían perturbadas.

Beneficiarios del Programa de recuperación productiva. Junio de 2009.

Empresas	Beneficiarios	Monto comprometido
Hasta 10 trabajadores	2.994 (3,5%)	5.366.250 (2,7%)
Entre 11 y 50 trabajadores	11.980 (14,2%)	24.666.500 (12,5%)
Más de 50 trabajadores	69.654 (82,3%)	167.349.500 (84,8%)
TOTAL	84.628	\$197.382.250

Fuente: MTESS (2009). Programa de recuperación productiva. Informe de situación. Junio de 2009.

El costo de estos programas en términos fiscales puede resultar significativo ya que su efectividad depende fuertemente de la extensión en el tiempo del subsidio, es decir de cuanto dura la situación de crisis de la empresa. Por otra parte, frente a la acuciante situación social del gran parte de la población por qué subsidiar

¹² Diario Página 12, 6 de agosto de 2009.

a las medianas y grandes empresas, tales como las terminales automotrices Volkswagen y Ford que tienen más de cuatro mil trabajadores en el REPRO. ¿Por qué subsidiar sus ganancias? ¿Por qué debería el Estado –financiado sustancialmente con impuestos regresivos pagados por los más pobres- pagar el costo de la crisis empresarial? Nuevamente, los grandes capitales –que tienen un discurso uniforme acerca de un supuesto Estado Predador- son los mayores receptores de este tipo de subsidios.

¿Garantizar un ingreso o un trabajo? La propuesta del Plan de Ingreso Social (pero) con Trabajo.

*“en vez de reprimirlos a palos
hay que correrlos con palas”
(Anibal Fernández, Jefe de Gabinete)¹³*

El PIST tiene como objetivo generar empleos para trabajadores desocupados en situación de pobreza a través de cooperativas destinadas a realizar tareas de utilidad social tales como “pintado de escuelas y construcción de redes cloacales y veredas” (Presidencia de la Nación, 14 agosto de 2009).

Con este plan se afirma la idea de activación de las políticas sociales según la cual los beneficiarios de los programas deben realizar alguna contraprestación (un trabajo en este caso) a cambio del dinero que perciben. Desde diversos ámbitos académicos y políticos se postula que el otorgar un ingreso sin contraprestación desincentivaría la “cultura del trabajo” de manera que quienes cobren ese beneficio perderán el interés en buscar un empleo. Esta idea estuvo detrás de la desarticulación del PJJHD y el traspaso de beneficiarios hacia el Plan Familias y el SCE.

¹³ Declaraciones ante manifestaciones de piqueteros que demandaban más planes JJHD. Diario página 12, 16 de agosto de 2004.

Indirectamente, desde esos mismos sectores, se cuestiona la permanencia en el tiempo de la situación de “desocupado” y de beneficiario de un plan social como el PJJHD. ¿Por qué este grupo de desempleados permanece tanto tiempo en esta situación? ¿No buscan “activamente” trabajo? ¿Han perdido incentivos a insertarse laboralmente? ¿Quieren efectivamente trabajar? Todas esas preguntas ponen la carga de la prueba sobre el desocupado y pobre, quien es hecho responsable por su situación.

La visión ortodoxa señala que el desempleo y su duración serían resultado de estrategias individuales basadas en cálculos racionales. Para la teoría de la búsqueda de empleo (*job search*) es el individuo quien decide la duración de su estadía en el desempleo en función de los costos de la búsqueda (ingresos que pierde de ganar por estar desempleado y el costo de adquirir información, entre otros factores) y los beneficios derivados de encontrar un empleo mejor remunerado. De esta manera, la permanencia de estas personas en el desempleo (o cobrando algún plan social) sería una decisión individual en función de cálculos racionales de costo-beneficio.

Sin embargo, desde mediados de la década de los setenta la evidencia muestra que la duración media del desempleo aumenta significativamente en los países desarrollados aun en un contexto de baja en los seguros de desempleo (y por lo tanto de mayor costo de permanecer buscando) y de menores oportunidades de empleo (y por lo tanto de un menor beneficio esperado de continuar la búsqueda de empleo). De esta manera aparecen nuevas explicaciones del fenómeno que centran la mirada en las decisiones de contratación de las empresas. Aquí aparecen las diversas teorías basadas en el ranking o fila de trabajo que establecen los empleadores de los potenciales empleados, ya sea teniendo en cuenta su capital humano acumulado (BECKER, 1964), su probable costo de capacitación (THUROW, 1975) o la duración

del período que se encuentra desempleado (BLANCHARD; DIAMOND, 1990). En virtud de estas nuevas interpretaciones teóricas comienza a admitirse que el desempleo puede no ser transitorio ni ser voluntario sino que puede depender de causas ajenas a las personas involucradas.

Sin embargo, siempre permanece un dejo de sospecha acerca de la *actitud* (ganas de trabajar, intensidad de su búsqueda de empleo) de este grupo de desocupados. Demaziere (1995) sostiene que esta desconfianza se debe a que los desempleados de larga duración cuestionan la legitimidad socialmente aceptada de la situación de desempleo, definida como fenómeno transitorio e involuntario y ponen en riesgo dos componentes normativos centrales a la ética del trabajo como valor. Primero, por ser ocasional la falta de empleo excusa al desempleado de la sospecha social de ser vago. Segundo, por ser involuntaria la falta de trabajo es sufrida por el desempleado, que se diferencia de aquellos individuos indisciplinados, inestables, irresponsables, que por ello son considerados responsables de su propia exclusión.

Esta misma explicación, el desincentivo a trabajar y la pérdida de la cultura del trabajo ha sido utilizada para demorar la implementación de una propuesta tendiente a garantizar un ingreso básico a la población (o cierta parte de ella como los menores de 18 años o los ancianos) desvinculado de su participación en el mercado de trabajo.

Cada vez son más los académicos y organizaciones sociales que cuestionan la centralidad del empleo para garantizar un ingreso digno a la población, afirmando que el acceso a un puesto de trabajo ya no asegura la satisfacción de las necesidades básicas. En la actualidad la pobreza no se limita solamente a aquellas personas que tienen dificultades para obtener un puesto de trabajo sino que incluye también a trabajadores ocupados, algunos de los cuales se encuentran incluso empleados en el sector más formal de la economía.

Un paso adelante sería avanzar en la transformación del sistema actual de derechos y prestaciones sociales ligadas al empleo hacia un sistema en el que la ciudadanía sea la base para tener garantizados esos derechos¹⁴. El desafío inmediato es ampliar la cobertura hacia quienes se encuentran por fuera del Estado de Bienestar, buscar una propuesta más integradora, que incluya a la gran mayoría de la población dentro de los circuitos de consumo de la sociedad.

¿Por qué razones no se avanza en una propuesta más inclusiva? En primer lugar, el costo de llevar adelante una medida como alguna versión del ingreso básico involucra un monto tal de recursos que entraría en contradicción con algunos pilares de la estrategia macroeconómica tales como el sostenimiento de los superávits fiscal y comercial (FÉLIZ; PÉREZ, 2007). A su vez, su financiamiento haría necesaria una reforma tributaria que aumente los ingresos fiscales y garantice la solvencia intertemporal de la medida. Aún el nivel de presión tributario actual no es sostenible con la actual estructura impositiva basada en una elevada imposición al consumo (ROZENWURCEL; VAZQUEZ, 2008) y la historia nos muestra que la Argentina nunca ha logrado desarrollar un impuesto a la renta significativo –tanto en lo que respecta a la renta personal como en la imposición patrimonial- (CETRÁNGOLO; GÓMEZ SABAINI, 2007), lo cual nos revela la dificultad de tal empresa. En segundo lugar, las propuestas en este sentido han sido presentadas en sociedad por fuerzas opositoras al gobierno (la central sindical alternativa CTA¹⁵, el partido político ARI, organizaciones de trabajadores desocupados “piqueteras”); y finalmente, un beneficio de tipo universal limita la discrecionalidad en la asignación de planes, lo que restringe su rédito político.

¹⁴ La excepción son la salud y la educación públicas, que ya son de carácter universal.

¹⁵ La Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) surgió en los años noventa como una separación de la Confederación General del Trabajo (CGT), la tradicional central sindical de Argentina. Desde sus inicios, la CTA está demandando ser reconocida legalmente como una Central alternativa con personería gremial en todo el país.

La propuesta del ingreso básico, si bien no representa una solución definitiva a los problemas sociales de la población, cuestiona algunos principios básicos vinculados al funcionamiento del sistema económico capitalista. Esencialmente, aumenta el poder de negociación de los trabajadores frente a sus potenciales empleadores, dado que –al tener asegurado un mínimo nivel de ingresos que garantiza su reproducción- ya no tendrían la “necesidad” de aceptar obligatoriamente cualquier trabajo. El debate de las múltiples aristas de esta propuesta puede a su vez contribuir a la reflexión acerca de qué constituye trabajo útil en nuestra sociedad, ya que dejaría de ser solamente el mercado el que decide qué trabajo se realiza y cuál no (la gente podría negarse a realizar trabajos en los cuales no sienta satisfacción en su realización). La moral tradicional estigmatiza el no-trabajo, sin embargo, un concepto más amplio de trabajo podría incluir múltiples actividades que hoy son consideradas como ocio.

Reflexiones finales

La economía argentina, que venía creciendo ininterrumpidamente desde 2003, comienza a ser afectada por la crisis global a partir de 2008. Ante un modelo de acumulación que mostraba sus límites sociales y económicos, la crisis internacional agrava la situación e interpela nuevamente las políticas públicas destinadas a combatir los problemas sociales.

Los distintos instrumentos que implementan los Estados generalmente se corresponden con los diagnósticos acerca de la situación social. De allí que estas interpretaciones preceden y condicionan la elección de los programas implementados.

A partir de 2003, en Argentina la macroeconomía fue puesta como la encargada de resolver la cuestión social. Problemas tales como el desempleo, la pobreza, y la redistribución del ingreso hacia

los sectores más humildes pasaron –nuevamente- a depender de manera central de la continuidad en el tiempo de la reactivación económica y su derrame de los resultados del crecimiento. Esta receta que parece tener algunos resultados en los primeros años de la posconvertibilidad se torna claramente insuficiente hacia 2007/2008, momento en que se intensifica la puja distributiva, aumenta los conflictos laborales, la presión sobre el gobierno de las cámaras patronales y la economía tiende a desacelerarse. Las principales consecuencias de este proceso las sufren aquellos sectores en la base de la pirámide social, aquellos que se encuentran excluidos de los servicios sociales atados a un empleo formal.

Hace más de una década Castel (1995) nos señalaba que el empleo estable, a través del contrato por tiempo indeterminado, estaba perdiendo su hegemonía pues el capital demandaba –y creaba- nuevas formas de empleo que incluyen a una multitud de situaciones heterogéneas: contratos de trabajo por tiempo determinado, trabajo transitorio, trabajo a jornada parcial, y diferentes formas de “empleos ayudados”, es decir sostenidos por el poder público.

Frente a tal situación, si el desarrollo económico capitalista en Argentina no logró incluir a buena parte de los trabajadores en el período de auge surgen dudas acerca de si podrá hacerlo en la actual situación de crisis.

En consecuencia, entendemos que las políticas públicas sociales y de empleo aplicadas en Argentina en la última década (incluidas las implementadas a partir de la crisis internacional) son ampliamente insuficientes. Alineadas con una visión ortodoxa, remiten (con un discurso renovado) a las políticas focalizadas que segmentan a la población en “grupos objetivos” y tienden a colocar a los beneficiarios en un lugar de “dependencia” frente al Estado.

Creemos que frente a esa tendencia es necesario avanzar en una reformulación radical de los ejes de las políticas públicas

sociales y de empleo. En tal sentido, la propuesta del ingreso ciudadano como base de una política social incluyente va en dicho sentido. Es decir, una concepción de las políticas públicas que no segmenta ni estigmatiza, sino que se apoya en la promoción de la equiparación de todos los ciudadanos y la generalización de los beneficios del desarrollo socio-productivo.

Una perspectiva que merece una mayor atención es la propuesta de ir más allá de la economía política del capital, hacia una economía política de los trabajadores (LEBOWITZ, 2005; DE ANGELIS, 2007). Esta perspectiva enfrenta –sin dudas de manera contradictoria– a los valores del capital con los sueños, deseos y necesidades vitales del pueblo. Privilegia así la solidaridad por sobre el egoísmo, la unidad de los pueblos por sobre la concentración y centralización regional del capital, el tiempo vital por sobre el tiempo de trabajo abstracto, el movimiento de personas, culturas y experiencias frente al intercambio de dinero y mercancías. Un programa que involucre la creación de espacios de intercambio no mercantilizados, que aseguren el derecho a los medios de vida, a la salud y la educación, a la información, al esparcimiento y al tiempo libre sin las restricciones de la propiedad privada. Un plan que suponga la socialización de los medios de producción estratégicos bajo el control del pueblo a través de formas de gestión democráticas y participativas. A estas políticas debería orientarse un lineamiento estratégico con base en los sectores populares organizados, apuntando a fortalecerlos como punto de partida de una nueva forma de organización y reproducción social, organizada sobre las bases de las necesidades populares antes que de las necesidades del capital.

Submetido em 30 de outubro de 2009 e aceito para publicação em 25 de março de 2010.

Referencias

BARBIER, J.C. A propos des difficultés de traduction des catégories d'analyse des marchés du travail et des politiques de l'emploi en contexte comparatif européen. *Centre d'études de l'emploi* (CEE). Noisy-le-Grand: Document de travail n. 3, 2000.

BECKER, G. *Human capital*. Chicago: Chicago University Press, 1964.

BLANCHARD, O.; DIAMOND, P. Ranking, unemployment duration and Wages. *Review of Economics Studies*, Stockholm, v. 61, n. 3, p. 417-434, jul. 1994.

CASTEL, R. *La metamorfosis de la cuestión social*. Buenos Aires: Paidós, 1995.

CECENÑA, A.E. Tecnología y organización capitalista al final del siglo XX. In: MARINI, R.M.; MILLAN, M. (coord.). *La teoría social latinoamericana: cuestiones contemporáneas*. México: El Caballito, 1996.

CETRÁNGOLO, O.; GÓMEZ SABAINI, J. *Política tributaria en Argentina: entre la solvencia y la emergencia*. Buenos Aires: CEPAL, 2007.

CHESNAIS, F. Discutir la Crisis. *Revista Herramienta*, 2008. Disponible en: <<http://www.herramienta.com.ar/modules.php>>. Acceso em: 16/6/2009

DE ANGELIS, M. *The beginning of history: value struggles and global capital*. Londres: Pluto Press, 2007.

DEMAZIERE, D. *Le chômage de longue durée*. Paris: Presses Universitaires de France, 1995.

FELIZ, M.; PÉREZ, P. ¿Tiempos de cambio? Contradicciones y conflictos en la política económica de la posconvertibilidad. In: BOYER, R.; NEFFA, J. *Salida de crisis y estrategias alternativas de desarrollo: la experiencia argentina*. Buenos Aires: Miño y Dávila, 2007.

FÉLIZ, M. ¿Hacia el neodesarrollismo en Argentina? De la reestructuración capitalista a su estabilización. *Anuario EDI*, Buenos Aires, n. 3, 2007.

FÉLIZ, M. ¿No hay alternativa frente al ajuste? Crisis, competitividad y opciones populares en Argentina. *Revista Herramienta*, Buenos Aires, n. 42, p.147-160, 2009.

GAUTIE, J. Quelle troisième voie? Repenser l'articulation entre marché du travail et protection sociale. *Centre d'études de l'emploi* (CEE). Noisy-le-Grand: Document de travail, n. 30, 2003.

GAZIER, B. L'employabilité : brève radiographie d'un concept en mutation. *Sociologie du travail*, Paris: Dunod, vol. 32, n. 4, 1990.

GAZIER, B. Assurance chômage, employabilité et marches transitionnels du travail. *Cahiers de la Maison des Sciences Economiques*, Paris, n. 9903, 1999.

GIDDENS, A. *The Third Way: The Renewal of Social Democracy*. Cambridge: Polity Press, 1998.

HARVEY, D. El 'nuevo' imperialismo. Sobre reajustes espacio-temporales y acumulación mediante desposesión. *Revista Herramienta*, Buenos Aires, n. 27, 2004.

HARVEY, D. El 'nuevo' imperialismo. Sobre reajustes espacio-temporales y acumulación mediante desposesión (parte II). *Revista Herramienta*, Buenos Aires, n. 29, 2005.

LEBOWITZ, M. A. *Más allá de El Capital: la economía política de la clase trabajadora en Marx*. Madrid: Akal, 2005.

MARINI, R.M. Proceso y tendencias de la globalización capitalista. In: MARINI, R.M. *América Latina, dependencia y globalización*. Buenos Aires: CLACSO-Prometeo, 1997. p. 231-252.

MTEySS. *Plan Jefas y Jefes de Hogar desocupados*. Un año de gestión: mayo 2002- mayo 2003. Buenos Aires, 2003.

MTEySS. *Programa de recuperación productiva*. Informe de situación. Buenos Aires, jun. 2009.

ROZENWURCEL, G.; VAZQUEZ, C. *Argentina modelo XXI: inestabilidad macroeconómica, empobrecimiento sostenido y políticas sociales*. Buenos Aires: Centro iDeAS –UNSAM, 2008.

THUROW, L.C. *Generating inequality: mechanisms of distribution in the U.S. economy*. New York: Basic Books, 1975.

TOMADA, C. La recuperación del trabajo y de sus instituciones rectoras. *Revista de Trabajo*, Buenos Aires, MTEySS, n. 4, 2007.